

Videograbación de audiencias.

Por Federico Nicolás GARCÍA*.

I. Planteo.

Apuntando a la búsqueda de verdad objetiva en el procedimiento, el sistema actual de soporte documental del expediente electrónico evidenció lo anacrónico del empleo de acta tradicional para registro de declaraciones. Más particularmente en los casos controvertidos donde se escruta por la veracidad, el detalle, la coherencia y toda una serie de impresiones y singularidades perceptibles por los intervinientes pero que el filtro del tipeo para escritura y relectura no está a la altura de reflejar fielmente. La mecanografía promedio de los usuarios no alcanza a cubrir dichos aspectos; la taquigrafía cede el lugar con la potenciación generalizada de la capacidad informática de almacenaje, procesamiento y conectividad de las sedes judiciales y de los particulares, de la mano de la implementación de las audiencias telemáticas como regla general. Esto último obligó a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires a dotar a las dependencias de equipo suficiente (PC's, videocámaras, micrófonos, altavoces).

Rezago del sistema judicial de antaño son las actas con firmas ológrafas. La fe pública como elemento basal de los procedimientos sin embargo con esta nueva modalidad adaptada por medio de normativa de la Corte, tiene un talón de Aquiles, y es la imposibilidad de estampar la firma de todos los intervinientes del acto; algunos por no estar integrados en el sistema informático de gestión multifuero de la administración provincial de justicia (aplicación "Augusta") el recepcionar la firma de trámites a usuarios externos, otros por no estar previsto el contar con firma digital. Ya sea en la práctica con las audiencias de celebración presencial, cuando no se estila más dejar un asiento en papel de lo actuado, como cuando se celebran de manera telemática, el elemento de la firma de todos los intervinientes continúa ausente. El artículo 290 del Código Civil y Comercial de la Nación es solemne: son requisitos de validez del instrumento público "*b) las firmas [...] de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos*". Es decir, en aras de la continuidad de los procesos judiciales y del sostén del sistema de administración de justicia, se suele dejar esa

*Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Internacional Público. Matriculado al Tomo III Fº 412 del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: Juzgado Civil y Comercial N° 3 departamento judicial Zárate Campana (2011/2018), Juzgado de Familia N° 2 ídem. (2018/actualidad). Auxiliar Letrado. Publicación previa: 2024, *Honorarios en cuestiones de patrimonio ganancial*, Revista Jurídica del Colegio de Abogados Zárate Campana volumen 5 https://ijeditores.com/pop.php?option=publicacion&idpublicacion=514&i_dedicacion=21744. Zárate, Argentina (fededemerzel@gmail.com).

solemnidad de lado y no surgen impugnaciones serias al momento de discrepar con las actas labradas, máxime si se adopta el recaudo de releerlas. Ahora bien, un error común es confundir al funcionario judicial con fedatario cuando tal atribución tiene fuente exclusivamente legal y corresponde a los Escribanos al momento de extender actas notariales (art. 312 CCyCN) cuando no concurre la firma de todos los involucrados (art. 306). Fuera de esa excepción, lo que hace plena fe es el instrumento público (art. 296) y no la persona por sí misma. El instrumento público requiere la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial (funcionario judicial, más precisamente Secretario -art. 125 inc. 5 CPCyC- según ley, o Auxiliar Letrado siempre y cuando no se entienda invadida la atribución que los códigos, leyes de procedimiento, acordadas y resoluciones le confieren a los Secretarios -AC. SCBA N° 2.196/1987-). Claramente el ejemplo de los Auxiliares Letrados como actuarios se da gracias a una interpretación forzada de la norma que permite delegar a los primeros funcionarios la tarea, visto que la "invasión" de la atribución refiere a que no sea contraria a la ley o normativa de la Corte, no al sentimiento particular del secretario sobre que un subalterno suscriba un acta o intervenga en un acto en su lugar. La definición de instrumento público contenida en el art. 289 CCyCN remite para el caso judicial, a "*b) los instrumentos que extienden [...] los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes*".

Entonces, dando por sentado que la impugnación de un acta en la cual intervinieron juez, auxiliar letrado, y partes citadas, con arreglo al código de procedimientos no marca una diferencia válida entre la participación de un funcionario u otro pues el cuestionamiento relevante no radicaría en la persona o cargo que interviene, salvo causales de recusación, lo relevante es la fidelidad del contenido que guarde el instrumento. En el pasado, cuando las actuaciones se tramitaban en soporte papel, la firma del documento sellaba su destino en cuanto a la expresión de voluntad del suscribiente y la ausencia de la misma daba por tierra a tal manifestación siendo la única excepción a ello tramitar la redargución de su falsedad (art. 296 CCyCN). Era un asunto grave y de suma irregularidad que un instrumento careciera de todas las firmas necesarias. En el presente, con la virtualidad patente en casi todos los aspectos cotidianos, ¿cuál es la forma idónea de salvar o disminuir la brecha de recelo o suspicacia que pueda generar la emisión de un documento suscripto únicamente por agentes judiciales como ser magistrado y funcionario? Dejar constancia de la lectura y asentimiento con el contenido del acta por parte de los participantes es una manera, pero resulta un formalismo incluido en cualquier modelo o planilla estandarizada y propagada por la administración de justicia. Un error factible es olvidar borrar dicha circunstancia si no aconteciere lo

que equivale a firmar un documento en blanco con potenciales efectos nocivos a las partes. Sin embargo, lo superador e incontrovertible, salvo que se trate de una adulteración del sistema de archivos digitales -que se encuentra en el mismo nivel de gravedad y criminalidad que de adulteración del texto de un acta-, es la videograbación de la audiencia o en su defecto, la grabación del audio de la misma.

II. Juicios públicos y transparentes.

Es una deuda pendiente hacia la sociedad dar transparencia y publicidad a los juicios, sobre todo teniendo en cuenta su estadio actual de desarrollo político, tecnológico y económico. Ni que hablar sobre la reducción enorme de tiempos que insume tomar nota, detraer recursos de un funcionario que pueden aprovecharse no ya como mero operador de los artefactos informáticos y escribiente sino como colaborador del juez y co-interrogador activo en la causa. Se trata de captar una declaración sin interrupciones a causa de la redacción de un acta tradicional; un diálogo fluido con el interlocutor que percibe gestos, tonos, pausas y muchísimos detalles más que el papel ni el usuario saben ni tampoco pueden recrear con la lectoescritura. La videograbación dificulta maquinaciones y mendacidades considerablemente a comparación del acta tradicional. La crítica más frecuente que pueda darse quizá es que con el documento escrito uno ya está acostumbrado y entrenado para revisarlo, buscar o pasar revista rápidamente a un detalle importante sin tener que ver todo el registro audiovisual pero ello no es del todo acertado y tiene dos desventajas; el acta circunstanciada está circunscripta a asentar lo que los usuarios creen en ese momento es de relevancia y limitado por el cansancio, pensamiento y procesamiento del texto convertido a tipeo (más cuando el declarante tiene dificultades en la dicción, y/o es verborrágico, o locuaz, o de rápido hablar, resultando seriamente cercenado el contexto (léanse los arts. 125 inc. 5 y 851 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires “[...] *una relación abreviada [./.] de lo sustancial [...]*”). Asimismo, atenta contra el impulso buscado por el legislador de pasar inmediatamente a sentenciar tras dar cierre a la etapa probatoria (arts. 360, 481 y 850 inc. 4 CPCyC). Por otro lado, dando fuerza también a esta modalidad, se otorga al juez la facultad de dirigir la audiencia en su completitud; inicio, suspensión, finalización, correcciones disciplinarias (*vgr.*: exclusión por interrupciones indebidas), requerir al declarante que ajuste sus dichos a los hechos relevantes, filtrar y readecuar preguntas de los abogados o las partes. Todas las incidencias son planteadas y resueltas en el momento agilizando significativamente los plazos. Es decir; por un lado, abrevia significativamente los tiempos en las declaraciones con un registro instantáneo que permite concentrarse en las mismas,

las enriquece, permite su cotejo de manera eficiente, se sintoniza con la modernidad en que vivimos, pone a prueba por mejora de desempeño a los operadores y registra con marcada e innegable superior autenticidad las expresiones de todos los participantes. Supone claramente un desafío analítico y luego expositivo por escrito para el poder judicial pero no debe olvidarse que en primer término la función de la justicia es impartirla, tome el tiempo que tome, cueste el esfuerzo que cueste, y segundo, elevaría o tendería a necesitar mejorar la calidad profesional de todos los implicados, principalmente de los abogados que es de ellos de quien primariamente dependen las probabilidades del resultado de un litigio puesto que son los primeros obligados y responsables en volcar con toda contracción sus labores en favor de los intereses legítimos de sus clientes planteando un buen caso. Al referirme como no acertada la crítica sobre la compulsión de los registros de video y audio quisiera dirigir la atención al desarrollo de las técnicas utilizadas a tal efecto.

Entendidas como métodos eficaces de empleo de recursos para obtener resultados que sostengan la eficiencia, al igual que en todos los aspectos laborales cotidianos el humano propende a tornar cómodo su entorno para mejorar su situación. Desde marcadores de tiempo o hitos durante la grabación a notas particulares privadas, existe un sinfín de elementos y herramientas a disposición limitadas sólo por la imaginación del usuario. Seguramente existieron quejas o disconformidades cuando se pasó de un sistema exclusivamente verbal a uno escrito, pero la necesidad de documentar lo actuado obedecía a garantías reconocidas como el debido proceso por citar un caso de amplio contenido.

La idea que formulo en esta ponencia es que en la actualidad resulta inaceptable, contando con los recursos necesarios para implementarlo, se reproduzca un sistema de representación y documentación de expresiones tan precaria de detalles y matices que como la experiencia y la historia lo demuestran, se apega a la realidad formal de los acontecimientos en desmedro de la demanda humana, social y profesional imperante de un sistema moderno de justicia.

Por añadidura, agilizar una audiencia significa generar más espacio para las demás, arribar más rápidamente a una sentencia, a la culminación de los procesos, poner término o acelerar el fin de la incertidumbre de las partes, dar respuesta a la población sobre las cuestiones que someten a conocimiento y decisión del estado por el que han cedido libertades individuales a través de un pacto social. La agilización de cuestiones, en particular de los ciclos llevándolo al análisis de los procesos como conjunto estimula notablemente asimismo entre todos los operadores la retroalimentación, la autocrítica y reforma constante hacia la optimización de los recursos, replanteo de las formas de trabajo y finalmente la interpretación y

concepción del Derecho, desde los aspectos más puntuales hasta las filosofías involucradas en cada plexo normativo desarrollando la ciencia jurídica, desenterrándola del cúmulo de tareas que opera como barrera de hecho al dinamismo que justifica su existencia para dar solución pacífica, inmediata y actualizada al conflicto social. Sostengo que una vez sorteado este miedo o inercia de estancamiento por parte de los agentes y auxiliares de justicia se podrá elevar la vara hacia un standard serio, acostumbrarnos a ser más resolutivos y llegado el caso saber decir o aceptar una negativa razonada cuando los esfuerzos probatorios no convencen o no superan un mínimo recaudo convencional de diligencia.

III. El Artículo 126 del CPCyC.

El artículo 126 del Código de Procedimientos prevé aún la versión taquigráfica e impresión fonográfica de la audiencia:

"[...] A pedido de parte, a su costa, y sin recurso alguno, podrá ordenarse que se tome versión taquigráfica de lo ocurrido o que se lo registre por cualquier otro medio técnico, siempre que se solicite con anticipación suficiente. El juez nombrará de oficio a los taquígrafos, o adoptará las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes podrán pedir copia carbónica del acta que firmarán todos los concurrentes y el secretario".

Para el caso actual, la interpretación contemporánea podría darse válidamente en los siguientes aspectos operativos: a pedido de parte, prácticamente sin ningún costo razonablemente infranqueable si es que existiera, y sin posibilidad a revertir la decisión del juez, podrá grabarse o videograbarse lo ocurrido (con el celular, la computadora misma) sin problemas de anticipación dada la dotación de prácticamente toda la población, en especial la de los operadores judiciales, de dispositivos con capacidad sobrada de registrar de esa manera las audiencias. Tiene el juez las facultades necesarias (y discrecionalidad) para asegurar la documentación del registro y su autenticidad. Cualquier parte puede pedir una copia, ya sea para descargar de los servidores y bases de datos accesibles (comúnmente conocido como "la nube"), o portar una unidad de almacenamiento móvil para copiar allí la grabación.

¿Cómo decir que no, por ejemplo, a una parte que ofrece filmar o grabar audio con el dispositivo celular el acta para mejor detalle, al servicio de la Administración de Justicia? Mejor dicho, ¿con qué argumentos? Si ya en 1968 el Código preveía que el juez adoptaría las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y

su documentación. No parece justificado negarse a esta medida cincuenta y seis años luego desaparecido prácticamente su costo asociado con la proliferación y distribución de aparatos inteligentes de telefonía celular con tecnología de avanzada, sobrada capacidad informática para hacer frente a estos requerimientos, y programas que avanza en el subtítulo y transcripción automática de las declaraciones para comodidad del observador.

Del lado de los oferentes de las personas a declarar, también pueden existir motivos para preservar este sistema ineficiente (no diré arcaico pues antes y en varios sectores del planeta los procedimientos eran orales): apostar a la vaguedad de la declaración, su impresión ambigua o multívoca en acta, tiempos para recalcular la estrategia por si algo sale mal o no marcha tal cual lo esperado, cansancio del analista para confundirlo o empantanar su apreciación útil de la prueba. En cambio, si se cuenta con una velocidad o inercia positivas y ágiles desde la etapa probatoria, es mucho más fácil darse cuenta por donde transcurre el conflicto, el nudo de la historia. De las mismas expresiones de las partes y los abogados uno puede captar qué es lo que les resulta importante, si deja de serlo, los nuevos intereses, qué podrán impugnar y qué no. Sobre todo, brinda la oportunidad de dialogar con las partes depurando mutuamente impresiones, formas de razonar, pensar y percibir dando la opción de reajustar pretensiones sobre la marcha para que el principio de congruencia ante la falta de información o especificidad inicial no den con un rechazo rotundo o el reconocimiento de un crédito no apreciado o buscado. La misma teoría de los actos propios tiene mucho que aportar a partir del libre interrogatorio a las partes, e incluso de las preguntas cruzadas. Y por si fuera poco y uno perdiera el hilo de la conversación, queda a disposición para ver y escuchar nuevamente el material apropiado a los fines de sentenciar. Son todos argumentos a favor y ninguno en contra. ¿Qué hay de la autenticidad? Vale lo mismo o menos decir que se consignó en acta algo que no lo fue, a apostar a que alguien tenga la capacidad y medios a disposición para adulterar el contenido multimedia de un archivo de audio y video, todo ello accediendo violando los protocolos y recursos de seguridad informática de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el cual ya se sustentan y son almacenados todos los expedientes y demás actuaciones digitales. Es mucho más difícil adulterar o forzar esto último que equivocarse en la redacción de un acta, o falsearla. Si se quiere, desde este punto de vista, es una medida de seguridad adicional y bidireccional. El actuario deberá por caso, a los fines formales, certificar que la filmación fue hecha ante él y si se quiere, contar con una base de datos independiente para descarga permanente o temporal de los archivos. Por ello insisto en que no hay que ceder ante la resistencia a hacer mejor un trabajo o a implementar nuevas técnicas. Tómese por caso los juicios en el extranjero donde se

utiliza taquígrafo hace décadas sino un siglo. El nivel de oratoria requerido sin duda debe ser mayor al caso argentino pues conlleva una mayor preponderancia durante la tramitación de los juicios, además de su faz escrita. El tiempo transcurrió y el sistema continuó desarrollándose. No existen motivos de progreso y garantías en pie que justifiquen el atraso instrumental que sufrimos y padecemos. Todo el mundo lleva en su bolsillo un dispositivo móvil con espacio físico y virtual a disposición (*cloud*) excesivo para registrar en alta resolución y fidelidad de audio cualquier situación. De hecho, el sistema informático ya se adaptó para vincular servicios de almacenamiento masivo de datos en servidores externos incluso. También para la adjunción de archivos multimedia en las presentaciones y trámites electrónicos. Frente a las reservas o miedos de los magistrados, debe decirse que el camino académico y de preparación que atraviesa un juez, objetivamente es mayor al requerido para ser habilitado un abogado a ejercer la profesión. De hecho discurren por un proceso de concursos y examen de antecedentes resistiendo también un juicio valorativo del arco político en consenso democrático que culmina en su aval (conformación de ternas, selección del candidato y su designación). Emergen también si se quiere, del común de profesionales colegiados. El resto se trata de un proceso de prueba, error y adaptación. El juez tiene a las claras la posibilidad de tomar notas privadas que lo ayuden a recordar, recurrir y razonar lo acontecido durante las audiencias. En tal sentido la experiencia piloto del plan "justicia 2020" fue un gran avance e hito para la administración de justicia bonaerense resignificando con gran impacto este campo de la práctica forense. Esos costosos equipos adicionales pensados para coexistir con la pre transición al expediente mixto (ante-electrónico/digital) ya no son necesarios por las razones referidas.

IV. Ponencia.

En base a ello y expuestas las finalidades a alcanzar, propongo una actualización legislativa por la cual se modifiquen los artículos implicados del código de procedimientos con la siguiente expresión:

"EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1: *sustitúyase el inciso 5º del artículo 125, y los artículos 126 y 414 del Código Procesal Civil y Comercial (Decreto-Ley 7425/68) quedando redactados de la siguiente manera:*

'125°: 5°) El funcionario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido.'

'126°: Registro electrónico/digital. Para recibir alegatos y prueba; declaración a las partes, causantes, peritos, testigos y terceros, se videograbará o en su defecto grabará audio de la audiencia desde su inicio hasta su finalización, comprendiendo las incidencias que se planteen, sus recursos y resolución. En los procesos contradictorios, el registro electrónico/digital aludido será obligatorio con excepción por causa de fuerza mayor. La falta de expresión de causa y fundamento por parte del magistrado para prescindir del registro electrónico o digital en los supuestos obligatorios viciará de nulidad absoluta al acto. En las restantes diligencias así como en trámites voluntarios el registro multimedio aludido será optativo a criterio del juez y sin recurso alguno.'

'414°: Forma del acta. Imposibilitada la videograbación o grabación de audio con arreglo a lo dispuesto por el artículo 126°, las declaraciones serán extendidas por el funcionario a medida que se presten, conservando, en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado. Terminado el acto, el juez las hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o rectificar.

Lo que agregaren o rectificaren se expresará a continuación, firmando las partes con el juez y el funcionario. Deberá consignarse, cuando ocurra, la circunstancia de que alguna de ellas no hubiere querido o podido firmar.'

ARTICULO 2: *Aplicación inmediata: la implementación de esta normativa es inmediata y operativa con los medios materiales actuales. La Suprema Corte podrá por vía de superintendencia proveer de equipamiento y asistencia técnica adicional o específica para mejorar las condiciones, seguridad y conservación de los registros.*

ARTICULO 3: *Comuníquese al Poder Ejecutivo."*

Afirmo con toda seguridad, que este modesto cambio repercutirá positivamente y a gran escala en el sistema de justicia Civil, Comercial y de Familia.
